

Santiago, 28 de enero de 2022

**REF: INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE
SOBRE LA CORTE CONSTITUCIONAL**

PARA: MESA DIRECTIVA DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 81, 82, 83 y 84 del Reglamento General de la Convención Constitucional, las y los convencionales constituyentes que suscriben, presentamos la siguiente iniciativa convencional constituyente sobre la “**Corte Constitucional**”.

Atendido su contenido, corresponde que esta iniciativa constituyente fuere remitida a la **COMISIÓN SOBRE SISTEMAS DE JUSTICIA, ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE CONTROL Y REFORMA CONSTITUCIONAL**.

I. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS.

Hablar de la Constitución tiene sentido cuando se la concibe como un instrumento de limitación y control del poder. Efectivamente, el control es un elemento inseparable del concepto de Constitución si se quiere dotar de operatividad al mismo, es decir, si se pretende que la Constitución se «realice», sólo si el control forma parte del concepto de Constitución, puede ser entendida ésta como norma¹. Por lo mismo, dentro de las materias constitucionales, un punto crucial resulta ser cuál será el modelo de control de constitucionalidad, puesto que sólo éste garantiza la aplicación de la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico.

En este contexto, toda constitución debe regular la justicia constitucional, por lo que nuestro trabajo es tomar una decisión respecto al modelo que más se adecue al sistema y que resuelva en definitiva sobre el control de constitucionalidad de las leyes, la protección de los derechos fundamentales y la resolución de los conflictos constitucionales, pensando en la defensa de la Nueva Constitución que estamos creando, fruto de un proceso democrático y participativo.

¹ ARAGÓN, Manuel (1987) “El control como elemento inseparable del concepto de Constitución”, Revista Española de Derecho Constitucional, Año 7. Núm. 19. Enero-Abril, p. 16.

Existen variados modelos de justicia constitucional, atendiendo a diversos criterios de clasificación. Dos de estos criterios de clasificación son, en primer lugar, la estructura de la justicia constitucional, donde encontramos modelos difusos o concentrados; y en segundo término, atendiendo a los procedimientos que se utilizan, se presentan los modelos concretos o abstractos. Cada modelo tiene sus ventajas y desventajas, existiendo además estructuras mixtas o ampliadas, que han ido evolucionando en el tiempo, no existiendo modelos totalmente concentrados o totalmente difusos, por ejemplo.

Clásicamente, hay dos modelos históricos de justicia constitucional, que han influido notablemente en la configuración de esta alrededor del mundo. Por una parte, está el modelo estadounidense, caracterizado por ser difuso y concreto, siendo resultado directo del principio de supremacía constitucional configurado a partir de la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos contenida en la sentencia del caso *Marbury vs. Madison*. Esta no hace otra cosa sino determinar que ninguna ley puede contradecir a la Constitución, pues ésta es la norma superior del ordenamiento y, por tanto, todos los jueces deben privilegiar la aplicación de la misma por encima de las leyes inferiores; así, los jueces y tribunales estadounidenses enjuician la constitucionalidad de las leyes en el marco de cualquier proceso cuyo conocimiento se les presente, lo que se conoce como *judicial review*.

De esta manera, en el sistema estadounidense, la justicia constitucional se confía al conjunto del aparato jurisdiccional, y no se distingue de hecho de la justicia ordinaria, en la medida en que todos los litigios, cualquiera que sea su naturaleza, los juzgan los mismos tribunales y, en líneas generales, en idénticas condiciones. Así las cosas, la dimensión constitucional puede hallarse presente en todos los litigios, y no precisa de un tratamiento específico². Sin embargo, dada la existencia del principio del *stare decisis* que incrementa la fuerza de la Suprema Corte, mediante el cual se vincula a los tribunales inferiores con las decisiones de ésta, se ha considerado que esto la equipara, con algunas diferencias, a los tribunales constitucionales.

Por otro lado, encontramos el modelo europeo, caracterizado por ser concentrado y abstracto. Este control de constitucionalidad “tiene que centralizarse en torno a un órgano específico y[a] que confiárselo a todos los jueces resulta inviable al no existir la regla del precedente en los sistemas romano-germánicos, lo que hace inasumibles los riesgos de contradicción en la jurisprudencia. De este modo, y esquematizando la postura kelseniana, podemos hablar de un control concentrado llevado a cabo por una jurisdicción específica, control que es abstracto, ejercido por vía de acción, con efectos generales de la declaración de inconstitucionalidad y que, en cuanto a la autoridad de cosa juzgada en las decisiones, presenta carácter absoluto³”.

² FAVOREAU, Lois (1994) *Los Tribunales Constitucionales*, Ariel, Barcelona, pp. 15,16

³ FERNANDEZ, José Julio (2000) *La Justicia Constitucional Europea ante el siglo XXI*, Tecnos, Madrid, pp.27,28

Ahora bien, este modelo es el que probablemente ha sufrido más cambios desde la concepción kelseniana original, por cuanto no tan solo surgen diferentes variantes en cuanto al órgano de control, siendo tribunales o cortes constitucionales, o salas especializadas de un tribunal supremo, sino que además aumenta de forma importante el alcance de los procesos constitucionales, configurando un modelo de amplia protección que contiene el control de constitucionalidad de las leyes, la protección de derechos fundamentales y la resolución de conflictos constitucionales.

Actualmente en iberoamérica nos encontramos con modelos mixtos en los que “hay una mezcla de jurisdicción concentrada y de jurisdicción difusa en el control de la ley, lo que ha originado que, pese a existir diferencias, ya no pueda hablarse, con propiedad, de una distinción radical entre los diversos modelos de justicia constitucional”⁴. De allí que la existencia de un tribunal o corte constitucional no constituya per se un problema, sino que será su diseño institucional a través de su integración, nombramiento y funciones lo que va a determinar el rol que cumplirá la institución en sí misma. En el caso chileno, el sencillamente traspasar las funciones del actual Tribunal Constitucional a una sala especializada o ad hoc de la Corte Suprema no cambia sustancialmente los elementos ya mencionados.

Una de las principales críticas de quienes son contrarios a la idea de una corte constitucional, es el argumento de la “objeción democrática”, sustentada principalmente en dos aspectos. El primero, respecto a la falta de legitimidad democrática del juez constitucional, dado que estos no son elegidos por votación popular, cuestión que es igualmente aplicable a la Corte Suprema, en caso de instaurar una sala especializada o ad hoc para estos efectos. La idea de que tienen mayor legitimidad democrática las y los integrantes de algún cargo electo popularmente, no le quita legitimidad a las demás instituciones, pues ello implicaría que estamos frente a un sistema en el que quien considere gozar de mayor legitimidad democrática es el único que puede ejercer sus facultades plenamente, poniendo en juego una lucha de legitimidad interna en el sistema democrático y haría inviable todo sistema político⁵.

Los órganos de control de la constitucionalidad son democráticos porque la propia Constitución les da ese carácter, es decir, en un sistema democrático será la Constitución, creada en nuestro caso a través de un proceso constituyente con una Convención Constitucional, con participación popular, integrada de manera paritaria, con escaños reservados y con un plebiscito de salida, la que determinará las facultades de los órganos que actúan en un Estado, y si el procedimiento para su nombramiento se apega a lo establecido por la Carta Magna, entonces dichos órganos son democráticos en origen, y cuando ejercen sus funciones y las desarrollan de acuerdo a lo previsto por la propia Constitución, en consecuencia, sus decisiones serán plenamente legítimas y democráticas. El problema del actual Tribunal

⁴ ARAGÓN, Manuel (2019) El futuro de la justicia constitucional, *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, 23(1), 11-41, p.20

⁵ HERNÁNDEZ, Arturo (2015) *Modelos de justicia constitucional Una revisión crítica a la luz de los nuevos desarrollos de la justicia constitucional* [Tesis de Doctorado, Universitat de València], p.191

Constitucional es que es el guardián de una Constitución de origen ilegítima, por ende, sus fallos contramayoritarios, estarán siempre a la retaguardia de nuestra sociedad.

El otro aspecto, que suele contemplar la crítica de la objeción democrática, es el carácter de legislador negativo que asume el Tribunal Constitucional. El enfoque en este aspecto atiende a la facultad de tendría una corte o tribunal constitucional para revisar la actividad del parlamento, en consideración que la creación de la ley es una función exclusiva de éste último. Ahora bien, cuando una ley es declarada inconstitucional por la jurisdicción constitucional lo que se está haciendo es resolver un exceso en la las funciones del parlamento en la creación legislativa, cuyos límites se hallan establecidos en la propia Constitución, en un sentido formal, esto es, en la adecuación al proceso previsto para tal actividad, y en un sentido material, de adecuación del producto con los contenidos constitucionales, en particular con los valores previstos en la norma suprema⁶. El ejercicio del poder estatal, en cualquiera de sus funciones, no puede estar exento de control, elemento indispensable de cualquier estado constitucional de derecho. De allí, que el problema radica en el momento en que se efectúa el control, siendo la existencia del control preventivo, uno de los elementos que convertirá a un tribunal o corte constitucional en una especie de “tercera cámara”.

En efecto, es el control preventivo el cual presenta graves inconvenientes, ya que “el planteamiento del recurso o acción previa de inconstitucionalidad supone la interrupción del proceso de aprobación y entrada en vigor de una norma, en tanto no se produzca el correspondiente pronunciamiento del órgano de justicia constitucional. Ello puede suponer una invitación a maniobras dilatorias, a efectos de retrasar la entrada en vigor de leyes aprobadas por el órgano legislativo, mediante su impugnación previa, por parte de los grupos políticos situados en minoría en el cuerpo legislativo”⁷.

A lo anterior, es posible seguir sumando una serie de críticas, como que “a) Dicho control no es satisfactorio desde el punto de vista técnico, ya que el juez no dispone de un tiempo de examen suficiente. b) Un precepto legal aún no aplicado no ha demostrado todavía sus imperfecciones o irregularidades constitucionales. c) El control es ilegítimo, porque pone en causa o molesta el ejercicio de la soberanía parlamentaria, interponiéndose entre el voto y la promulgación de la ley. d) Este control tiene por objeto preceptos aún no perfectos, todavía no integrados al ordenamiento jurídico, por tanto, no existe aún una infracción a éste, que es lo único que hace válida la intervención judicial como intervención jurisdiccional, por lo que en este caso estaríamos frente a un control jurídico pero no un control jurisdiccional. e) Dicho control convierte a la Corte Constitucional en una tercera Cámara Legislativa”⁸.

⁶ HERNÁNDEZ (2015), p.193

⁷ López Guerra, L; Protección de derechos fundamentales por la jurisdicción constitucional en Centroamérica y Panamá, en Justicia Constitucional: una promesa de la democracia, Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente –ILANUD–, San José, 1992, pág. 30

⁸ NOGUEIRA, Humberto (2004) Consideraciones sobre la Jurisdicción Constitucional en América y Europa, en Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, No.4, 2004, p. 274

En razón de lo anterior, es que nuestra propuesta es de un modelo mixto, con una Corte Constitucional especializada –sin perjuicio del rol de tutela de los derechos fundamentales que recae sobre los órganos de la jurisdicción, esto es, los tribunales ordinarios–, con funciones de control de constitucionalidad de las leyes solo de manera represiva, de protección de los derechos fundamentales y de resolución de conflictos constitucionales, atendiendo la futura existencia de una forma de Estado Regional, con regiones autónomas.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

La iniciativa propuesta contempla un título denominado “De la Corte Constitucional”, que contiene cinco artículos.

El primer artículo propuesto, establece el rol y propósito general de la Corte Constitucional, y enuncia los principios que rigen la jurisdicción constitucional, siendo estos la deferencia a los órganos legislativos, dada su legitimación democrática; la presunción de constitucionalidad de la ley y la búsqueda de una interpretación conforme, entendiendo que la declaración de inconstitucionalidad debiera fundarse en razones manifiestas y mantener un carácter excepcional, pudiendo la norma impugnada mantenerse bajo una interpretación que la haga conforme a la Constitución; y el de no justiciabilidad de asuntos de naturaleza exclusivamente política, pues la jurisdicción constitucional sólo intervendrá para resolver controversias jurídicas.

Luego, en el artículo segundo propuesto, configura a la Corte Constitucional como un órgano jurisdiccional autónomo, técnico, profesional, independiente e imparcial, que tendrá como principal función el control de la supremacía de la Constitución. Sus resoluciones, que solamente se podrán fundar en razones de derecho, gozarán de eficacia de cosa juzgada.

Su composición será de quince integrantes, evitando los empates a través de un número impar y se renovarán por parcialidades cada tres años. Además, se establece que la Corte Constitucional deberá ser paritaria, plurinacional y equitativa territorialmente. Este último punto resulta importante para asegurar que las decisiones tendrán un enfoque desde los diversos territorios del país, razón por la que al menos dos tercios de sus integrantes deberán provenir y haber ejercido en regiones distintas a la metropolitana.

Existirán tres mecanismos de elección de sus integrantes, que buscan asegurar una diversa representación en la Corte Constitucional, con base en criterios técnicos y de mérito profesional. Así, un tercio será elegido por el Congreso Nacional; otro por el Presidente o Presidenta de la República, de una lista cerrada que confeccionará el Consejo de la Justicia; y otro tercio será elegido en votación por todos los jueces y juezas de la jurisdicción ordinaria de entre sus pares.

Además de agregar requisitos como ser juristas de reconocida competencia, con más de quince años de ejercicio profesional, y pertenezcan a diversas especialidades del Derecho, se

incorpora una prohibición importante, que busca impedir el fenómeno del cuoteo político en la composición de la Corte Constitucional, consistente en que no podrán ser jueces o juezas de la Corte quienes se hubiesen desempeñado en cargos de elección popular, hubiesen sido candidatas o candidatos a estos, o quienes hayan desempeñado el cargo de Ministra o Ministro de Estado, u otros cargos de exclusiva confianza del gobierno, durante los ocho años anteriores a la elección.

Complementa lo anterior lo indicado en el tercer artículo de la propuesta, el cual establece que la calidad de juez o jueza de la Corte Constitucional es incompatible con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, con el ejercicio libre de la profesión de abogada o abogado y con cualquier actividad profesional o comercial. Se establece además que no podrán ser reelegidos, salvo las excepciones establecidas en caso de reemplazos.

En el cuarto artículo propuesto, encontramos las funciones de la Corte Constitucional. Es posible advertir de antemano, que esta no tiene funciones de control preventivo existiendo controles abstractos y concretos, pero sólo *a posteriori*; dentro del primer grupo, encontramos la acción de inconstitucionalidad de leyes, normas con fuerza de ley y estatutos regionales, y dentro del segundo, a la inaplicabilidad de preceptos legales en gestiones ante tribunales. Dentro de las funciones más novedosas para nuestro ordenamiento jurídico encontramos, en el numeral segundo, las acciones de inconstitucionalidad por omisión de las medidas legislativas –normas legales o con fuerza de ley– necesarias para el cumplimiento de las normas constitucionales; en el numeral quinto, el pronunciamiento sobre las decisiones judiciales recaídas en la acción de tutela de los derechos fundamentales –que abordamos en una iniciativa constituyente separada–, para velar por la correcta interpretación general de estos derechos; y, en el numeral sexto, las cuestiones de competencia entre el Estado central y las regiones autónomas o comunas, en el marco de la forma de Estado regional. A su vez, en el numeral séptimo, se concentran en la Corte Constitucional todas las contiendas de competencias que pudieran suscitarse entre las autoridades políticas u órganos administrativos y los tribunales.

El desarrollo de la legitimación activa y procedimientos para el ejercicio de las funciones de la Corte Constitucional se entrega a la ley, estableciéndose sólo el marco general de lo primero. En este aspecto destaca que la inaplicabilidad no funcionará como un recurso a disposición de las partes de una gestión judicial, sino que únicamente podrá plantearse por el tribunal que conoce la causa, actuando de oficio o a petición de aquellas.

En el último artículo propuesto, se regulan los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional, las cuales serán inapelables, de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio. Para acoger una inconstitucionalidad de una disposición legislativa o de una norma con fuerza de ley, o la inaplicabilidad de un precepto legal, es preciso que éste o aquella no

pueda ser interpretada por la Corte Constitucional de modo de evitar efectos inconstitucionales, ya que ésta estará facultada para limitarse a declarar en su sentencia la interpretación del precepto legal en conformidad a la Constitución.

Por otra parte, si una sentencia declara una inconstitucionalidad, esta tendrá como efecto la derogación de la norma legal impugnada y su expulsión del ordenamiento jurídico, sin embargo, no producirá efecto retroactivo, por lo que los fallos dictados con anterioridad a tal declaración, mantendrán su valor de cosa juzgada. A su vez, si se constata la existencia de una inconstitucionalidad por omisión, la Corte Constitucional pondrá en conocimiento del órgano legislativo competente, nacional o regional, la sentencia respectiva –de naturaleza exhortativa– a fin de que dicho órgano actúe con arreglo a las formas previstas por la Constitución, para subsanar la referida omisión.

Finalmente, en los artículos transitorios propuestos se busca, por una parte, terminar con el actual Tribunal Constitucional, estableciendo un régimen de transición para las causas que este siga al momento de su cierre y, por otra, la instalación de la nueva Corte Constitucional y las reglas para su primeras renovaciones parciales, entre otros aspectos.

III. PROYECTO DE ARTICULADO.

Título X: “De la Corte Constitucional”

Artículo De la jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional será ejercida por una Corte Constitucional, con la finalidad de garantizar la supremacía de la Constitución, bajo los principios de deferencia a los órganos legislativos, presunción de constitucionalidad de la ley, búsqueda de una interpretación conforme con la Constitución y no justiciabilidad de asuntos de naturaleza exclusivamente política.

Los órganos del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, deberán aplicar las normas, en el ámbito de sus competencias, efectuando una interpretación orientada hacia la Constitución.

Artículo Corte Constitucional. La Corte Constitucional es un órgano jurisdiccional autónomo, técnico, profesional, independiente e imparcial, encargado del control de la supremacía de la Constitución, cuyas resoluciones se encuentran fundadas únicamente en razones de derecho y gozan de eficacia de cosa juzgada.

Estará conformada, paritariamente y con criterios de plurinacionalidad y equidad territorial, por quince juezas y jueces, uno de los cuales será su presidenta o presidente, elegido por sus pares y que ejercerá sus funciones durante dos años.

Las juezas y los jueces de la Corte Constitucional durarán nueve años en sus cargos o hasta que cumplan setenta y cinco años, y se renovarán por parcialidades cada tres años.

Funcionará en salas preferentemente especializadas, integradas por cinco juezas o jueces, o en pleno, de conformidad a lo dispuesto por la ley.

Las juezas y los jueces de la Corte Constitucional serán elegidas y elegidos de la siguiente manera:

- a) Un tercio será elegido por el Congreso. Tres serán nombrados directamente por la Cámara Territorial y dos serán previamente propuestos por la Cámara de Diputadas y Diputados para su aprobación o rechazo por la Cámara Territorial, en base a criterios técnicos y de mérito profesional. Los nombramientos, o la propuesta en su caso, se efectuarán en votaciones únicas y requerirán para su aprobación del voto favorable de los tres quintos de las y los parlamentarios en ejercicio.
- b) Un tercio será elegido por la Presidencia de la República, en base a criterios técnicos y de mérito profesional, eligiéndolos de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propondrá el Consejo de la Justicia.
- c) Un tercio será elegido de entre las juezas y los jueces de la jurisdicción ordinaria, por votación, entre sus pares que ostenten la calidad de titulares. Las juezas y los jueces electos para el ejercicio de esta función quedarán suspendidos de sus cargos judiciales de origen en tanto se extienda éste.

Las y los postulantes al cargo de juez o jueza de la Corte Constitucional deberán ser abogadas o abogados, con más de quince años de ejercicio profesional, todas y todos juristas de reconocida competencia, y que se desempeñen o hayan desempeñado como juezas o jueces de la jurisdicción ordinaria, fiscales del Ministerio Público, defensoras o defensores penales públicos, académicas y académicos de Universidades acreditadas por el Estado, provenientes de diversas regiones del país y que pertenezcan a distintas especialidades del Derecho. Al menos dos tercios de sus integrantes, deberán provenir y haber ejercido sus funciones, por un mínimo de cinco años, en regiones diversas a la metropolitana.

No podrán ser jueces o juezas de la Corte Constitucional quienes se hubiesen desempeñado en cargos de elección popular, hubiesen sido candidatas o candidatos a estos, o quienes hayan desempeñado el cargo de Ministra o Ministro de Estado, u otros cargos de exclusiva confianza del gobierno, durante los ocho años anteriores a la elección.

Una ley determinará la organización, funcionamiento, procedimientos y fijará la planta, régimen de remuneraciones y estatuto del personal de la Corte Constitucional.

Artículo De las juezas y jueces de la Corte Constitucional. La calidad de juez o jueza de la Corte Constitucional es incompatible con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o con empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de la carrera funcionaria; con el ejercicio libre de la profesión de abogada o abogado y con cualquier actividad profesional o comercial. La ley determinará las demás incompatibilidades e inhabilidades.

Las juezas y jueces de la Corte Constitucional serán inamovibles y no podrán ser reelegidos, salvo aquel que lo haya sido como reemplazante y hubiere ejercido el cargo por un período menor a cinco años. Cesarán en sus cargos por condena por crimen o simple delito, renuncia y enfermedad incompatible con el ejercicio de la función.

En caso que un juez o una jueza de la Corte Constitucional cese en su cargo, se procederá a su reemplazo por quien corresponda, de acuerdo con el inciso quinto del artículo anterior y por el tiempo que falte para completar el período del reemplazado.

Al terminar su periodo, y durante los dos años siguientes, no podrán optar a ningún cargo de elección popular ni de exclusiva confianza de alguna autoridad.

Artículo Atribuciones de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tendrá las siguientes atribuciones:

1. Resolver las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, nacionales o regionales, y en contra de estatutos regionales.
2. Resolver las acciones de inconstitucionalidad por omisión de las medidas legislativas necesarias para el cumplimiento de las normas constitucionales.
3. Resolver los requerimientos de inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación, en cualquier gestión pendiente que se siga ante un tribunal, resulte contraria a la Constitución.
4. Resolver los reclamos en caso de que la o el Presidente de la República no promulgue una ley nacional cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda, o una o un gobernador regional no promulgue una ley regional cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que corresponda.
5. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales recaídas en la acción constitucional de tutela de los derechos fundamentales.
6. Resolver las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre las autoridades del Estado central y las autoridades de las regiones autónomas o los gobiernos locales.
7. Resolver las contiendas de competencias suscitadas entre las autoridades políticas o órganos administrativos y cualquier tribunal.
8. Las demás previstas en esta Constitución y la ley.

El procedimiento, el quórum y la legitimación activa para el ejercicio de cada atribución se determinará por la ley. Con todo, las acciones de los numerales 1 y 2 de este artículo, podrán ser presentadas por el Presidente o Presidenta de la República, por el Congreso, por la Defensoría del Pueblo, por la gobernadora o el gobernador regional correspondiente y por la ciudadanía de forma colectiva; el requerimiento indicado en el numeral 3 podrá ser presentado sólo por el juez o jueza que conoce de la gestión pendiente, de oficio o a petición de parte, esta

última tramitada incidentalmente en la misma causa y cuya resolución será inapelable; la del numeral 4, por el Congreso o por la asamblea regional que corresponde, según el caso; y las cuestiones y contiendas de competencia contempladas en los numerales 6 y 7 podrán ser deducidas por cualquiera de las autoridades en conflicto.

Artículo De las sentencias de la Corte Constitucional y sus efectos. Las sentencias de la Corte Constitucional se adoptarán por consenso o por la mayoría de juezas o jueces que establezca la ley; en este último caso, sólo contendrán las razones que fundamentan el voto de mayoría. Tienen carácter vinculante, con efecto de cosa juzgada y de cumplimiento obligatorio para todos los órganos públicos, y contra ellas no cabe recurso ulterior alguno.

Las sentencias sobre inconstitucionalidad o inaplicabilidad podrán limitarse a declarar la interpretación del precepto legal en conformidad a la Constitución. La Corte Constitucional sólo podrá acoger la inconstitucionalidad de una disposición legislativa o de una norma con fuerza de ley, o la inaplicabilidad de un precepto legal, cuando no sea posible interpretarlo de modo de evitar efectos inconstitucionales.

Cuando la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de una disposición legislativa o de una norma con fuerza de ley, la sentencia tendrá efectos derogatorios a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, la que no producirá efecto retroactivo. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material de la disposición legislativa o de la norma con fuerza de ley declarada inconstitucional, mientras subsistan en la Constitución las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación con la norma ordinaria.

Si la Corte Constitucional verifica la existencia de inconstitucionalidad por omisión, lo pondrá en conocimiento del órgano legislativo competente, nacional o regional, a fin de que éste actúe con arreglo a las formas previstas por la Constitución, para subsanar tal omisión.

Declarada la inaplicabilidad de un precepto legal, éste no podrá ser aplicado en la gestión judicial pendiente en la que se originó el requerimiento.

Artículo Transitorio. La Corte Constitucional deberá quedar instalada dentro de los cuatro meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución. Con todo, la Corte Constitucional podrá instalarse y comenzar a funcionar con, a lo menos, dos tercios de sus integrantes.

Las y los ministros del Tribunal Constitucional no podrán ser elegidas o elegidos como juezas o jueces de la Corte Constitucional.

Para proceder al primer nombramiento de las juezas y jueces de la Corte Constitucional se aplicarán las siguientes reglas:

- a) El tercio correspondiente al Congreso será elegido conforme a lo dispuesto en el artículo XX (Corte Constitucional), para lo cual se convocará, previamente, a un concurso

público por las Cámaras del Congreso, dentro del primer mes de entrada en vigencia de esta Constitución.

- b) El tercio correspondiente a la Presidencia de la República será nombrado tan pronto el Consejo de la Justicia se hubiere instalado y haya procedido a proponerle las nóminas a que se refiere el artículo XX (Corte Constitucional).
- c) El tercio que corresponde ser elegido de entre los jueces y juezas de la jurisdicción ordinaria, por votación, entre sus pares que ostenten la calidad de titulares, se hará a partir de un padrón de personas habilitadas para sufragar, conforme al artículo XX (Corte Constitucional), elaborado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, dentro del primer mes de entrada en vigencia de la presente Constitución, considerando como día de cierre del mencionado padrón la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución. La inscripción de candidaturas, el proceso electoral y su calificación estarán a cargo del Tribunal Calificador de Elecciones, el cual determinará las fechas y demás aspectos necesarios para su correcto desarrollo, y que podrá requerir la asistencia y colaboración del Servicio Electoral, en caso necesario. La elección se realizará en la fecha que establezca el Tribunal Calificador de Elecciones, la que no podrá ser superior a los tres meses de la entrada en vigencia de esta Constitución.

La ley que regule la organización, funcionamiento, procedimientos y fije la planta, régimen de remuneraciones y estatuto del personal de la Corte Constitucional, deberá ser dictada dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de la presente Constitución.

Cuando corresponda la primera renovación parcial de las juezas y jueces de la Corte Constitucional, a los tres años de su instalación, se escogerán por sorteo quienes deberán cesar en sus funciones y renovarse, dos de cada tercio correspondiente. Para la segunda renovación parcial, se hará un sorteo para escoger dos de cada tercio, entre las personas restantes que fueron elegidas al instalarse la Corte. A partir de entonces se estará a lo establecido en el artículo XX. Para todos los efectos, los plazos de renovación se contarán desde la fecha en que la Corte Constitucional completará la totalidad de su primera integración de juezas y jueces. Los sorteos antes señalados serán realizados por el Tribunal Calificador de Elecciones.

Artículo ... Transitorio. El Tribunal Constitucional se entenderá suprimido de pleno derecho al cabo de seis meses de la entrada en vigencia de esta Constitución.

Las causas que se encuentren radicadas en el Tribunal Constitucional, al momento de la entrada en vigencia de la presente Constitución, seguirán siendo conocidas por éste hasta su sentencia de término. Para dicho efecto, los procedimientos y demás disposiciones legales que les eran aplicables subsistirán vigentes por el término necesario para la conclusión de dichos procesos, la cual no podrá exceder el plazo señalado en el inciso primero del artículo XX transitorio (anterior).

Vencido el anterior plazo, las causas que se mantuvieron pendientes serán traspasadas a la Corte Constitucional, que asumirá su tramitación en conformidad al procedimiento vigente al momento de su iniciación.

IV. FIRMAS.

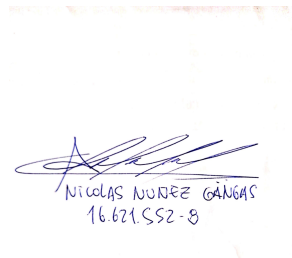


DANIEL BRAVO SILVA
Convencional Constituyente Distrito 5



Ingrid Villena Narbona
Convencional Constituyente Distrito 13
FIRMA

INGRID VILLENA NARBONA
Convencional Constituyente
Distrito 13

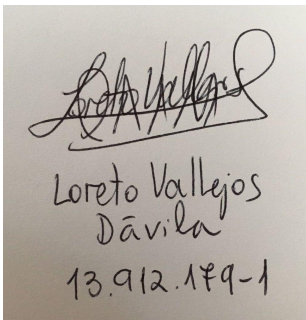


NICOLÁS NÚÑEZ GANGAS
16.621.552-8

NICOLÁS NÚÑEZ GANGAS
Convencional Constituyente
Distrito 16



GASPAR DOMÍNGUEZ DONOSO
Convencional Constituyente
Distrito 26



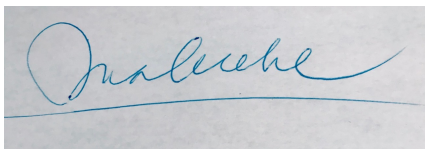
Loreto Vallejos
Dávila
13.912.179-1

LORETO VALLEJOS DAVILA
Convencional Constituyente
Distrito 15

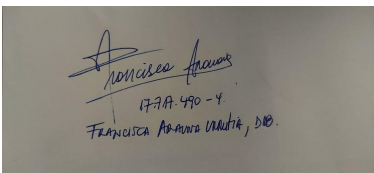


Adriana
Ampuero
16.507.007-0

ADRIANA AMPUERO
Convencional Constituyente
Distrito 26

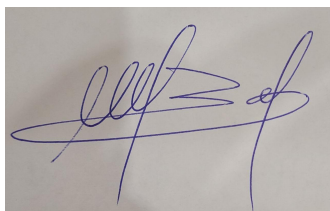


MALUCHA PINTO SOLARI
Convencional Constituyente
Distrito 13

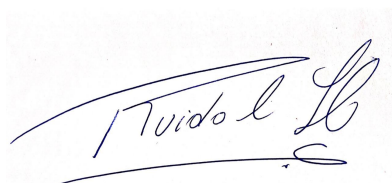


Francisca Arauna
17-71A-490-4
FRANCISCA ARAUNA URRUTIA, D.O.

FRANCISCA ARAUNA URRUTIA
Convencional Constituyente
Distrito 18



NATALIA HENRIQUEZ
Convencional Constituyente
Distrito 9



LORETO VIDAL HERNÁNDEZ
Convencional Constituyente
Distrito 20



CÉSAR URIBE ARAYA
15.677.404-9

CÉSAR URIBE ARAYA
Convencional Constituyente
Distrito 19

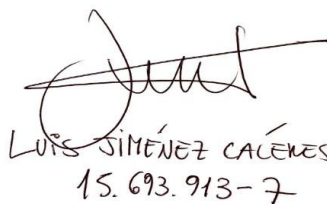


FRANCISCO CAAMAÑO
Convencional Constituyente
Distrito 14



Alvin Saldaña M.
Convencional Constituyente DIS

ALVIN SALDAÑA MUÑOZ
Convencional Constituyente
Distrito 15



LUIS JIMÉNEZ CÁCERES
15.693.913-7

LUIS JIMÉNEZ CÁCERES
Convencional Constituyente
Pueblo Aymara



Rosa Elizabeth Catrileo Arias
RUT: 14.222.289-2
ABOGADA

ROSA CATRILEO ARIAS
Convencional Constituyente
Pueblo Mapuche



ANDRÉS N. CRUZ CARRASCO
ABOGADO
www.cruzmuñozabogados.cl

ANDRÉS CRUZ CARRASCO
Convencional Constituyente
Distrito 20